

## **Plan Colombia y medio ambiente**

**Tatiana Roa e Hildebrando Vélez**  
**CENSAT Agua Viva – Foe (Colombia)**  
**España 2000**

### **El paisaje tiene historia**

La problemática ambiental ha estado siempre en el centro de los conflictos sociales. Las guerras por el dominio de las fuentes de abastecimiento económico y por el control territorial son en buena medida luchas ambientales. El paisaje se ha conformado como resultado de los conflictos entre los humanos. Las murallas, las obras de infraestructura, las obras militares han obedecido también a criterios de dominación y control de los factores naturales de los procesos de producción y acumulación. Pudiera decirse entonces que la guerra que precipita sobre Colombia tiene como uno de los motivos subyacentes más importante aspiraciones de parte de actores del conflicto, armados y no armados, por el control de la Amazonía, del Chocó biogeográfico, de los productivos Valles interandinos y de los Andes mismos como factores de acumulación del capitalismo ecológico o ecocapitalismo, que se erige como el modelo predominante de reproducción del capital. El problema ambiental radica no sólo en que el entorno sea el escenario o el medio de la confrontación sino en que es el objeto mismo de la confrontación. Hay un dicho que "cuando dos elefantes pelean sufre el pasto", acá el pasto es también el objeto de la pelea.

La distribución y el control de las bioregiones para propósitos económicos ha sido una condición del proceso de conformación societal y paisajístico de nuestro país. Un grupo minoritario de propietarios oligárquicos ha monopolizado la propiedad de la tierra por vías violentas y ha dado un ordenamiento al territorio acorde a formas de dominio político gamonalista y formas de valorización y renta absoluta y especulativa, sin que hayan desarrollado factores de acumulación industriales. Colombia está preñada por una amalgama de formas de valorización dominadas por el capital financiero internacional y por formas de acumulación rentista que subordinan y regulan los ámbitos de la

producción, la política y la cultura y con ello determinan cómo se ocupa el espacio y cómo se conforma el paisaje. Este proceso de formación económico social se da mediante la expulsión violenta de pequeños agricultores y campesinos, creando una especie de proletariado agrícola en las zonas cafeteras, formando una masa de fuerza laboral urbana que se asienta en las periferias de las ciudades y que gravita alrededor de una industria incipiente y de un comercio precario, desarrollando una ganadería extensiva, implementando algunas agroindustrias en los valles fértiles y de alta productividad ecológica de los ríos Cauca, Magdalena y otros. De paso, dada la poca capacidad empresarial de los sectores políticamente dominantes, se ha hecho entrega de los recursos mineros y petroleros a compañías transnacionales quienes los explotan llevando siempre los excedentes económicos a sus países de origen.

El campo y las zonas urbanas se van moldeando de conformidad con este modelo de capitalismo. La disputa por el espacio y la renta urbana coloca masas de desposeídos en lugares de alto riesgo, en las áreas inundables y en las laderas de las montañas. Allí se asientan a imaginar con desesperanza su aciago futuro.

Este proceso se ha dado no sin resistencia de los campesinos y de las fuerzas sociales, es más, el conflicto colombiano actual no surge con la Insurgencia sino que crea las condiciones para que la Insurgencia surja. Muchas de las regiones que hoy padecen más rigurosamente los efectos del conflicto militar son aquellas en las que se desarrollaron o prevalecen los proyectos mineros de la primera mitad del siglo (Barrancas, Segovia, etc.), aquellos que fueron los lugares donde se establecieron los enclaves agrícolas (Uraba, Putumayo, Orinoquía, Magdalena y Bolívar), donde la sociedad fue puesta al margen del sistema acumulación y donde las comunidades locales fueron empobrecidas económica y culturalmente al mismo ritmo que su entorno. Es en estas mismas zonas donde tuvieron origen las guerrillas.

Acá dejamos claro y sin rodeos afirmamos que no deseamos los métodos violentos para la resolución de las contradicciones, pero tenemos que reconocer que el enfrentamiento político y social que se vive en Colombia es gracias a que no se han podido resolver las causas de iniquidad.

Las consecuencias ambientales de esta manera conflictiva de poblamiento, ocupación y valorización del espacio son evidentes: La contaminación y pérdida

progresiva de las fuentes de sustento para las poblaciones urbanas y rurales, la degradación de los ecosistemas hídricos, lénticos y lóticos, la devastación acelerada de las selvas húmedas y altoandinas, la ubicación de las masas pobres en ecosistemas de baja productividad o su movilización hacia nuevas colonizaciones en las selvas húmedas y altoandinas y ecosistemas de páramo, el uso inapropiado de suelos de alta calidad agrícola para ganadería extensiva con subsecuente pérdida de sus características agrológicas, etc. El deterioro social y ambiental de las regiones mineras es un asunto que sobresale en nuestra problemática ambiental. De esto colegimos que el modelo de acumulación y quienes se han beneficiado de él tienen una gran **deuda ecológica** con el país y con el planeta.

Esta situación se complejiza más recientemente, a partir de los finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando en el marco de la globalización del negocio del narcotráfico, se gesta en Colombia un modelo de expropiación de las tierras colonizadas en el Magdalena Medio, la Orinoquía y la Amazonía, modelo que combina los intereses de narcotraficantes, grupos de defensa privados, gamonales y banqueros y una gran permisividad o ausencia del Estado. El narcotráfico surge y crece amparado por los poderes políticos y cumple en ese momento un papel de subsidiario y estabilizador de la economía, cuya estructura es golpeada por la crisis petrolera y el irresponsable endeudamiento externo -del que se estaban beneficiando politiqueros y ETN- y el fisco y la balanza de pagos son entonces carcomidos.

Hoy, en la medida que la diversidad genética, la producción de agua y de aire y el control del clima se hacen de importancia para la ciencia y el capital, su dominio y posesión se constituye en causa de conflicto. La manera de ver la naturaleza desde la perspectiva de la ciencia y de la producción da valor a funciones ecológicas de sistemas vivos y bienes de servicio universal, sobre los cuales en el pasado nadie ejercía como poseedor. Hablamos de los genes, del agua, del aire, etc. Estratégicamente los países de mayor biodiversidad y con funciones claves en la estabilización del clima global y con un gran flujo de energía de biomasa de alta calidad entrópica, se constituyen en objeto fundamental de la disputa. Entonces, a medida en que esas funciones, bienes y servicios ambientales se incorporan en los mecanismos de acumulación, resulta cada vez más importante reconocer su papel en el desenvolvimiento de nuestro conflicto.

La manera inequitativa como se han apropiado y como se apropian y distribuyen hoy estos factores productivos y ecológicos hay que considerarlas en el procesos de paz. Por ejemplo, en zonas de alta demanda de agua para agroindustrias o hidroeléctricas los empresarios se enfrentan a las necesidades de agua doméstica o para pequeños cultivos que tienen los pobladores, es el caso de la industria de la caña en el Valle del Cauca y la de las flores la Sabana de Bogotá y de los embalses y represas del páramo de Berlín, del páramo de Sumapaz o de Salvajina. Las zonas productoras de agua enfrentan la intervención de proyectos de infraestructura de transporte y acueductos para la valorización de terrenos urbanos en manos de casatenientes y constructores. Las comunidades protectoras de los ecosistemas de humedales que circundan las ciudades se enfrentan con las elites gobernantes rentistas que hacen avanzar el proceso urbanizador en sus posesiones suburbanas y de importancia ecológica. Los colonos e indígenas de las zonas de gran diversidad biológica del pie de monte llanero enfrentan a las compañías petroleras que además están avanzando en el control de información sobre la biodiversidad. Los habitantes del pacífico, afrocolombianos e indígenas, enfrentan proyectos de integración interoceánica y vial en la selva del Pacífico y la avanzada de las industrias madereras. El conflicto de los habitantes de los asentamientos subnormales urbanos en zonas industriales como Mamonal, Yumbo y Cazucá es permanente por la amenaza de las actividades contaminadoras de la industria. Hoy, en el ámbito de las negociaciones internacionales, se hacen presentes a nombre del Estado los emisarios de los intereses privados para construir las oportunidades de negocio y crédito para asegurarse el dominio de los mercados de biodiversidad, de sumideros de carbono, de privatizaciones y reformas de los sectores hídrico y minero y de manejo de desastres.

Sin duda hay que fustigar también a la guerrilla por los impactos que trae la voladura a los oleoductos como hay que condenar con dureza a las compañías petroleras incluida Ecopetrol, la empresa nacional, por los derrames de petróleo ocasionados por sus operaciones. Estos todos son asuntos que no pueden escapar en el análisis e interpretación de nuestro conflicto ambiental.

La impunidad ambiental es otro de los aspectos que contextualiza el afán de los inversionistas transnacionales. Los organismos multilaterales y los países se quejan de la corrupción, de la indiferencia e ineficiencia de la justicia, pero algunos se hacen los de la

oreja sorda frente a la impunidad ambiental que ha favorecido los procesos de acumulación de las empresas de sus países. Así por ejemplo, las empresas mineras del oro norteamericanas desbastaron la región del Bajo Cauca Antioqueño y las cuencas de los ríos Andagoya y San Juan en el Chocó. Las empresas petroleras desaparecieron las comunidades indígenas del Magdalena Medio, del Catatumbo, y más recientemente las petroleras británicas, alemanas y norteamericanas amenazan con desaparecer las comunidades del Arauca a las que ya les destruyeron su entorno y sus lugares sagrados. Los impactos sobre las fuentes de agua, sobre los bosques, sobre las culturas no han sido remediados, no han sido contabilizados, y cuando el gobierno ha procedido ha multar las compañías, las cifras han sido pírricas y jamás se ha indemnizado o resarcido a las comunidades lesionadas. En este sentido la deuda ecológica con nuestro país se hace inconmensurable.

### **El Plan Colombia**

El reto de nuestro proceso de paz, desde el punto de vista ambientalista, es que debemos enfrentar simultáneamente la crisis global ambiental y el conflicto socio político nacional. Nuestro reto es enfrentar la crisis civilizatoria con la construcción de sociedades sostenibles y enfrentar nuestra guerra con acuerdos estratégicos para la paz duradera. La paz nuestra está indisolublemente asociada con la paz en el mundo y con el mundo.

El Plan Colombia, presentado a la Unión Europea que será debatido en el *“Foro para el Fortalecimiento de la Democracia en Colombia”*, es una unidad con el plan aprobado por el congreso norteamericano. Se trata de una estrategia que antes de ser útil para "generar las condiciones propicias para construir una paz sostenible" como lo sostiene el gobierno busca, fundamentalmente, asegurar la alianza entre gobiernos, organismos multilaterales que aseguran las tajadas del capital de los países que los controlan, las empresas transnacionales, los gamonales y propietarios nacionales y los militares de EE UU y Colombia con el fin de garantizar la conquista y protección de los mercados de Sur América -incluidos los mercados de armas y servicios militares *outsourcing*-, así como la disponibilidad de nuestros bienes ambientales para el cumplimiento del papel que se nos asigna en el *Nuevo Orden Económico Global*. Se trata de una expresión de la integración comercial y en materia de seguridad de los países

latinoamericanos ricos en diversidad y bienes ambientales. Es el ejercicio de un control estratégico sobre las fuente de los nuevos valores económicos de la biodiversidad, la genética y las comunicaciones.

Lo que se ensaya en Colombia a través del llamado plan Colombia no es simplemente una salida al conflicto nacional sino un modelo de resolución de los conflictos de nuestra región, donde "la alianza" impone su concepto de paz, de democracia, de desarrollo y se apresura a controlar las fuentes de riqueza.

Es el libre mercado, el comercio libre, la libre empresa, el neoliberalismo que se impone a sangre y fuego como norma de orden social, cultural político y ecológico. Nuestros países o se incorporan o se desechan. El capital está dispuesto incluso a imponer operaciones multinacionales de pacificación, pero para ello tiene que hacer que el enemigo crezca lo suficiente para que se justifique la intervención, en este sentido nuestro conflicto es también se creatura. Ellos quieren imponer no una paz cualquiera sino una paz homogeneizante, apta para el proyecto del ecocapitalismo que surge como la forma más avanzada de acumulación del capital global. Con ello se paraliza la búsqueda de proyectos de vida, de alternativas **al** desarrollo -subrayamos "al" para no caer en concepciones desarrollistas-, y la pluralidad de posibilidades de construcción civilizatoria que surge en nuestros países como la fuerza de la esperanza. El peligro ambiental que encarna el llamado plan Colombia es realmente que se nos niegue la posibilidad de imaginar y construir nuestro propio futuro.

Hay una paz que quiere limitarse a combatir a los campesinos cocaleros y a la guerrilla a nombre de combatir el narcotráfico, sin combatir realmente el narcotráfico ni el trafico de armas y el lavado de activos que son sus acompañantes en una relación *sine quatum*. Estos tres elementos, cocaína, armas y activos, son los que hacen participar a Colombia de las dinámicas de la economía global subterránea y que le han dado un nivel de sostenibilidad a las formas de reproducción del capital en el país. De lo dicho inferimos que el problema del narcotráfico no se puede entender como un asunto local sino como un problema relativo a la manera como las economías ilegales se estructuran, legitiman e incorporan en los escenarios económicos, sociales y políticos globales. Estas afirmaciones explican por qué un conflicto social como el nuestro se vuelve un asunto de interés global, de cuya solución real o aparente muchos países quieren tomar parte.

Mientras unos a nombre del cultivo de hoja de coca fraguan una intervención, otros, los más ingenuos, buscan medidas que podríamos llamar medicalizadas: pretenden que un mal sistémico se remedie con un tratamiento quirúrgico. Pretenden atacar las causas atendiendo sólo al síntoma del cultivo de la coca.

El Plan Colombia es un conjunto de proyectos y una importante ayuda militar, que deshilvanadamente y bajo el pretexto del control de la expansión de los cultivos de coca y de una posible negociación con los alzados en armas, pretende arrastrar un volumen de recursos financieros que pueden llegar a quedar en manos de los corruptos y en el mejor de los casos de políticos y ONGs con escasa o ninguna legitimidad.

El Plan Colombia elaborado por algunos funcionarios del gobierno en colaboración con instructores norteamericanos no fue objeto de discusión y mucho menos de consulta con los ciudadanos colombianos a pesar de que sus efectos incidirán en su vida futura de una forma determinante. Las zonas a las que se dirige la inversión son aquellas donde coincide la presencia de ecosistemas de alto valor estratégico, guerrilla y campesinos, desplazados, desempleados y colonos que empobrecidos y marginados de los circuitos legales de la economía se han dedicado al cultivo de la coca; a ellos nadie les ha consultado y sin embargo sobre ellos caerá el látigo de la reciente presencia del paramilitarismo, de la intervención y la ayuda militar norteamericana, a la vez que con pequeños e incoherentes proyectos, se pretenderá aliviar las consecuencias de la guerra.

Sin duda la guerrilla será combatida, pero ya conocemos que en años de enfrentamiento el resultado que se ha obtenido es el robustecimiento de su capacidad operativa y la emergencia de actores ilegales que con métodos de exterminio han sembrado de angustia y dolor la vida de los habitantes de las regiones donde la guerrilla se presume ha transitado o se instala. Ello no ha sido fórmula para la solución de las causas de la guerra y por el contrario ha dejado más destrucción y secuelas cada vez más difíciles de subsanar. No debe quedar lugar a dudas que la búsqueda de la paz es nuestro objetivo, pero la paz además de ser la solución a las causas del conflicto, debe ser también la remediación de sus consecuencias.

Hay una polisemia de la paz que expresa la diferencia de intereses de los actores del conflicto, actores que dicho sea de paso también somos nosotros, por que somos hijos del conflicto, porque estamos del lado de las víctimas y porque tenemos la

responsabilidad de encontrar salidas. No somos entes asépticos y neutrales, tenemos un compromiso con la solución y las salidas a nuestro conflicto nacional. Los diferentes sentidos y significados que adquiere el proceso de paz están en relación con el papel histórico de los actores. De ahí que los significados que tiene la paz para las estructuras de poder de los gamonales en las regiones, para los ideólogos del paramilitarismo o para las transnacionales que tienen o quieren tener el dominio de fuentes de energía, como Occidental o British Petroleum o Repsol, son distintos del los que tiene para el pequeño campesino cocalero o para el sindicalista o para el habitante de los barrios marginados de las ciudades. Esta diversidad de significados debe permitir producir un método de entendimiento basado en principios éticos más que en reglas. Las reglas se quedarían en el nivel de la sintaxis los principios se dirigirían a los significados.

### **La apuesta económica del plan**

Dice el Plan Colombia en la versión que el gobierno presenta en Madrid que: "en relación a la conservación del capital natural, la estrategia busca generar condiciones ambientalmente sostenibles para el desarrollo de las regiones que como consecuencia del conflicto y la violencia están siendo afectadas de manera irreparable en sus fuentes de agua, los bosques y el patrimonio de los recursos naturales. En este sentido la estrategia de fortalecimiento Institucional y desarrollo social se concentra en las regiones con más biodiversidad y por lo tanto más frágiles las cuales, como la región amazónica, constituyen un patrimonio de la humanidad y se encuentran seriamente amenazadas"

Acá como en el documento en su conjunto se observa que el conjunto de proyectos que presenta el plan Colombia en el campo de la economía pretenden encaminarnos por el modelo de desarrollo de aplicación universal y que como molde de cortar galletas se aplica en todos los países de economías de bajos ingresos amparándose bajo el nombre de *desarrollo sostenible* o *desarrollo alternativo*. Es un modelo que no garantiza un adecuada distribución de los excedentes económicos ni de los ecosistemas, que no da seguridad ni soberanía alimentaria, que ve explotación donde las comunidades han visto aprovechamiento y conservación, que amenaza la intervención de ecosistemas estratégicos con obras de infraestructura que pretenden poner la producción en función de las exportaciones y particularmente para nuestro caso la exportación de biomasa y no

de productos manufacturados, con el consecuente empobrecimiento de las funciones de los ciclos del suelo, de la energía y del agua.

La estrategia de sustitución de cultivos ilícitos por programas de desarrollo alternativo lograrán consolidar el proceso de relativización que se ha emprendido en el país. El modelo agroexportador, fundamentado en plantaciones y monocultivos de caucho, palma africana, palmito y maderables, está siendo alentado con la ingenuidad de los campesinos y con la complacencia y para beneplácito de los gremios de productores como Fedepalma, Augura y Fedegan quienes verían realmente los beneficios y fortalecerían la estructura de tenencia agraria que hoy prima en el país. Es decir que en estas zonas donde sean exterminados los cultivos ilegales a los campesinos e indígenas no les quedaría mas remedio que subordinarse a contratos de aparcería en gran escala y la nueva contra-reforma agraria sustituiría la producción campesina por el dominio de grandes cultivadores que se beneficiarían de la mano de obra barata de los campesinos y los indígenas. Nuevos latifundios aparecerían de manera que el sistema gamonalista se vería fortalecido, la presencia de la inversión extranjera se incrementaría con el respaldo de los gamonales que siempre están dispuestos a abrir las puertas del país a los inversionistas y el comercio extranjeros bajo condiciones leoninas.

No hay que olvidar que Putumayo, Orinoquía, Amazonía y Magdalena Medio son regiones estratégicas en la producción y prospección minera y petrolera y es sobre las que se piensa aplicar el Plan Colombia. Allí ya se han firmado contratos con empresas estadounidenses, canadienses, árabes y europeas que tienen gran interés por el petróleo y el oro y por el conocimiento de la biodiversidad y sus formas de uso local, que también en forma de renta relativa las ETNs obtienen de sus actividades de estudio ambiental en las zonas de exploración. El Putumayo y la Orinoquía constituyen las puertas de entrada para la Amazonía mal llamada "patrimonio de la humanidad" pero que, si esto sigue como va, terminará siendo patrimonio de las ETN y un puñado de socios locales. Por eso no es extraño que la compañía Occidental hubiese estado tan activa en el impulso del Plan Colombia entre los representantes y senadores de Estados Unidos, ni es extraño que la compañía B.P. se proponga en asocio con el Banco Mundial el *Business Partnerships for Development* para la región del Casanare.

Se piensa desde la retórica oficial que la salida es dar valor a los bienes ambientales haciéndolos objeto de la economía crematística y atractivos para las inversiones de las grandes empresas llámese madereras, de caucho, agroindustriales, químicas, farmacéuticas, etc. Simultáneamente y bajo la tutela del FMI y la Banca Multilateral se invita a acelerar la entrega de los llamados recursos naturales y petroleros para satisfacer la demanda de divisas y para cubrir el faltante fiscal (que es producto, entre otras causas de menor importancia, del alto costo de las operaciones militares y de la seguridad social de las fuerzas de seguridad -lo que parece un pleonismo pero es una realidad-) y se ponen las eficientes empresas energéticas estatales de noroccidente del país en subasta pública, se vende la participación en la mina de carbón del Cerrejón (la más grande a cielo abierto en América Latina, cuya propiedad se comparte con Oxy) por un precio ridículo, etc. El país se subasta mientras a la comunidad internacional se le pide aportes para cubrir los costos sociales de la guerra.

A nuestro juicio una alternativa económica para Colombia, como lo sugieren múltiples experiencias urbanas y rurales diseminadas a lo largo y ancho del país, debe fundamentarse en formas de economía de auto-abastecimiento alimentario regional con criterios de seguridad y soberanía; debe fundamentarse en el mayor valor agregado de los productos artesanales y con alto contenido de mano de obra; debe atender a criterios de empleo eficiente de energía de alta calidad de entropía y menos dependiente de energías fósiles.

Ahora bien, en relación con los planes de desarrollo social el problema consiste en que se da aspirina para el tratamiento de SIDA. El problema de restablecimiento de las confianzas sociales consiste en que las salidas serán inconsecuentes si no hay la posibilidad de satisfacción de las necesidades esenciales, sino hay la posibilidad del despliegue pleno de las potencialidades de creación de nuestra sociedad, sino se mira que los valores alterados no son exclusivamente los económicos sino también los valores éticos y los valores culturales. Si la acción se reduce al campo económico sólo se estará arañando la superficie de la realidad. Si sociedad, individuo, y entorno son calificados como formas de capital, las salidas seguirán atrapadas de contenidos economicistas.

## **Fumigaciones e impactos.**

Los circuitos productivos de la coca y la amapola tienen un cúmulo de lesivos impactos ambientales: los relacionados con los proceso de poblamiento y ocupación de los colonizadores amapoleros, los ocasionados de manera extensiva por la colonización puramente coquera, los impactos por el uso desbordado de percusores químicos, el efecto multiplicador ocasionado por las fumigaciones con herbicidas, la transformación de los estilos de vida y introducción de valores y conductas sociales insostenibles en las comunidades locales y patologías múltiples. La economía cocalera y amapolera ha dejado una deplorable huella ecológica que se amplía en la medida que los desplazados por la guerra y por el combate contra los cultivadores van selva adentro o monte arriba.

Por otra parte, los Impactos de la erradicación de los cultivos ilícitos mediante la fumigación química o biológica no son nuevos, podemos recordar la fumigación de los cultivos de marihuana, principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, mediante la utilización de paraquat y glifosato que causaron daños considerables sobre estos importante ecosistemas y los pueblos indígenas y campesinos que allí habitan. Hoy todavía se reportan casos de malformaciones genéticas en humanos y animales como secuelas de esas fumigaciones.

Valga decir que la política de erradicación de los cultivos ilícitos ha sido un fracaso. Como sostienen el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Policía antinarcóticos, en la pasada década el área sembrada se incremento en un 200% a pesar de haberse utilizado otras formas de erradicación y herbicidas, particularmente el glifosato o Round Up, de la compañía multinacional Monsanto, que bastantes cuestionamientos técnicos y ambientales ha tenido.

La fumigación en Colombia ha conducido a los habitantes locales a vender sus parcelas, generalmente a los narcotraficantes, y a internarse en lo profundo de la selva, ocasionando mayor deforestación de regiones como la Amazonía y otros sistemas boscosos, con consecuencias incalculables. Ya el Ministerio del medio ambiente tímidamente obstruyó la introducción de los herbicidas granulares agresivos, aduciendo que esto podría transformar la selva colombiana en un desierto.

Ahora bien, los narcocultivos se han extendido en todo el territorio nacional, particularmente en las zonas de mayor valor ambiental y ecológico, y han sido utilizadas

entre otros fines, como medio para la financiación de muchos de los grupos armados. De ahí que erradicar los cultivos en unas pocas regiones podría significar su expansión hacia otras dejando sin solución el asunto y por el contrario generando unos impactos más extensos.

En marzo de este año se ha denunciado el convenio que firmaría el gobierno de Pastrana con el Programa de Naciones Unidas de Fiscalización Internacional de las Drogas, UNDCP, para la utilización de agentes biológicos, posiblemente haciendo uso del hongo *Fusarium oxysporum*, llamado EN-4, cepa que ha sido aislada, probada y elaborada de forma granular en los laboratorios del Servicio de Investigación de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, este microbio es hoy rechazado en ese mismo país. La fumigación con este hongo ocasionará impactos impredecibles en los ecosistemas de más alta biodiversidad del mundo y cuyos efectos no se circunscriben al territorio colombiano sino que potencialmente pueden extenderse a toda la región amazónica, y amenaza la salud de los pueblos indígenas y colonos que allí habitan.

Al parecer se aproxima una guerra biológica contra los campesinos cocaleros en el Sur del País y quizá, en el fondo, la aplicación de armas biológicas contra la Insurgencia. Estos hechos recuerdan la época de la utilización del agente naranja, herbicida de alta toxicidad que fue utilizado en las selvas del Vietnam, para la destrucción del entorno que le servía de protección a la guerrilla vietnamita. La Amazonía ha de ser empleada ahora como conejilla de indias de los Estados Unidos, interesados en *“tener disponible un agente biológico específico ecológicamente seguro, confiable y eficaz para controlar el arbusto de coca en Colombia, la región andina y posiblemente otras partes del mundo”* como afirma el Programa Internacional para el control de las drogas de Naciones Unidas. Preocupa el efecto que tendrá en un ecosistema tan vulnerable como la Amazonía la utilización de este hongo, además que se desconoce los efectos que sobre el conjunto de sus ecosistemas pueda causar. La aplicación de estas fumigaciones violaría sin duda el protocolo de la convención de armas biológicas y tóxicas, asunto que al parecer poco interesa a nuestros hermanos del norte.

Este método de erradicación de cultivos viola todas las obligaciones adquiridas por Colombia bajo el Convenio de la Biodiversidad Biológica en cuanto se relaciona con la

preservación y conservación de la biodiversidad. Ello nos lleva a los ambientalistas a denunciar esta situación ante la comunidad internacional.

Otro asunto delicado es que el borrador del proyecto menciona que: *“El gobierno [de Colombia] será responsable de ocuparse de cualquier demanda que pueda presentarse por terceros contra la ONU, incluyendo UNDCP, su personal u otros partidos que realizan servicios a nombre de la ONU en el marco de este proyecto.”*

### **La escalada de la guerra y su impacto ambiental.**

el Plan Colombia que conocemos acrecentará el conflicto armado y generará consecuencias ambientales directas e indirectas que afectarán en mayor medida la sociedad y el entorno ambiental. Sin duda un crecimiento de las operaciones de guerra auspiciadas por el gobierno de USA contribuirá a incrementar la inequidad ambiental, la pobreza ambiental y la violencia ambiental que pesa sobre los colombianos. Algunas de las consecuencias nos limitaremos a enunciarlas.

Desplazamientos: Ellos van abriendo nuevas trochas y senderos en zonas de conservación y áreas protegidas, conllevan abandono de la actividad agrícola, de la infraestructura social y productiva, reducción de la producción de alimentos, concentración de la propiedad rural en manos de los terratenientes (contrareforma agraria), pérdida de las seguridades ecológica y social (desempleo, carencias de educación, etc., transformaciones culturales) en las poblaciones urbanas. Los desplazamientos conllevan a mayor demanda de agua y energía y al incremento de los asentamientos marginales y de la pobreza urbana. Allí se sentirá una mayor demanda de servicios públicos, educativos, de salud, de vivienda.

Gestión ambiental amenazada. El incremento de la guerra imposibilita una adecuada gestión ambiental por parte de las autoridades ambientales y de la sociedad civil, ya líderes y miembros de organizaciones sociales, autoridades locales y funcionarios públicos han visto amenazadas sus vidas, por garantizar una adecuada gestión ambiental en sus regiones.

Impactos de acciones armadas y las consecuencias sobre la sociedad y los ecosistemas. Destrucción de hábitats humanos y de especies animales. Contaminación de fuentes de agua por el empleo de agentes químicos o por destrucción de fuentes de

abastecimiento para evitar el suministro a los combatientes o a las bases sociales. Contaminación por voladuras de oleoductos y destrucción de medios de transporte. Sin duda nuestro conflicto tiene causas, y tendrá consecuencias, sociales y ecológicas que hay que resolver y evitar y ello sólo es posible mediante un acción coordinada y comprometida de nosotros los colombianos y de las manos solidarias de nuestros hermanos de todas partes del mundo. No podemos enneguarnos más ante los temas ambientales pues ellos están en la médula de la guerra. Que no nos pase lo que a los combatientes del cuadro de Goya, que está acá en el Museo del Prado, que mientras se dan palos el pantano se los traga. El mundo puede desaparecer antes de que realmente hayamos disfrutado su presencia.